



Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
Representante por el
Departamento de La Guajira

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese la sección 2239 del artículo 2 del Proyecto de Ley No. 090 de 2024 Cámara "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025" el cual quedara así:


SECCIÓN: 2239					
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR					
CTA PROG	SUBC SUBP	CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			10.939.021.817	1.944.891.056	12.883.912.873
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			7.892.598.001	2.755.564.705	10.648.162.706
2202		CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	7.892.598.001	2.755.564.705	10.648.162.706
	0700	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	7.892.598.001	2.755.564.705	10.648.162.706
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN			18.831.619.818	4.700.455.761	23.532.075.579

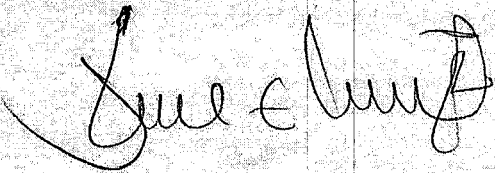
JUSTIFICACIÓN

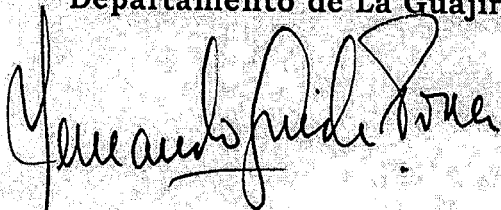
Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la planta de personal y la cobertura educativa de la institución que no solo le presta el servicio educativo al departamento de La Guajira sino también a toda la costa caribe, solicito el aumento del presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR para su funcionamiento en 19% y presupuesto de inversión en 19% de "APORTE NACIONAL."

Por lo anterior, solicito a los Honorables Congresistas, acompañar la proposición presentada.



Atentamente,


JORGE ALBERTO CERCHIARO FIGUEROA
Representante a la Cámara
Departamento de La Guajira




Mauricio Pardo

Milena Jarama Díaz

	
COMISIÓN CUARTA	
CAMARA DE REPRESENTANTES	
Recibido Por:	
Fecha:	3/09/2024
Hora:	5:35pm
Número de Radicado:	178



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
Representante por el
Departamento de La Guajira

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 79 del Proyecto de Ley No. 090 de 2024 Cámara "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025" el cual quedará así:

ARTÍCULO 79. Las entidades del orden nacional responsables de la cartera de la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria, darán prioridad en la ejecución con sus respectivos presupuestos a la atención de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribí en el departamento de La Guajira en cumplimiento de la Resolución 60 de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y sus Autos de seguimiento.

JUSTIFICACIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución 60/2015 consideró que: "los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento" y con base en esto, le otorgo medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribí en el departamento de La Guajira,

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-302/17 resolvió "tutelar los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribí" y "declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, antes el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional."

Así las cosas, es oportuno manifestar la exigencia de darle cumplimiento a la sentencia en comento toda vez que el ordenamiento jurídico colombiano estatuye para el incumplimiento de orden judicial y desacato de tutela en sus artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 414 y 454 del Código Penal lo siguiente:

"ARTICULO 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción". (Negrilla y subraya fuera del texto).

COMISIÓN CUARTA
CAMARA DE REPRESENTANTES
Recibido Por: Damian Ismael Gomez
Fecha: 3/09/2024
Hora: 5:35 pm
Número de Radicado: 179



Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
Representante por el
Departamento de La Guajira

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

"ARTICULO 53. Sanciones penales. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar.

También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivo la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual hubiera sido parte". (Negrilla y subraya fuera del texto).

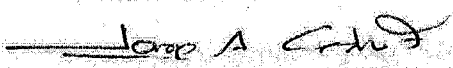
"ARTICULO 414. Prevaricato por omisión. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años." (Negrilla y subraya fuera del texto).

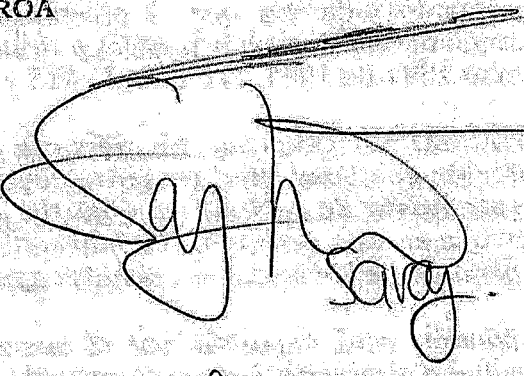
"ARTICULO 454. Fraude a resolución judicial. Modificado por el art. 12, Ley 890 de 2004, Modificado por el art. 47, Ley 1453 de 2011. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes." (Negrilla y subraya fuera del texto).

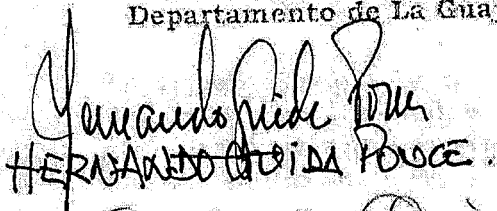
Pese a que una proposición presentada el año pasado y que fuera avalada dio origen a este artículo 79, su redacción fue muy general y a la fecha no hay entidad que asuma la responsabilidad, por lo que es preciso identificar las carreras responsables para que realmente exista el compromiso que se requiere.

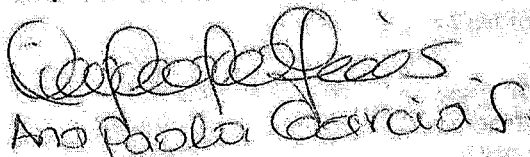
Por todo lo anterior, solicito a los Honorables Congresistas, acompañar la proposición presentada.

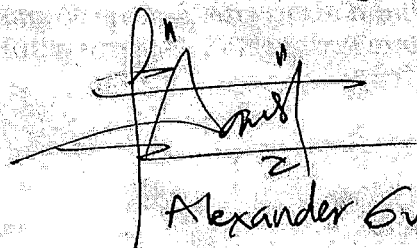
Atentamente,


JORGE ALBERTO CERCHIARO FIGUEROA
Representante a la Cámara
Departamento de La Guajira


Mauricio Pardo Díaz


HERNANDO PARDO DÍAZ


Ana Paola García S.


Alexander Guevara - Guainá



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
Representante por el
Departamento de La Guajira

PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 090 de 2024 Cámara "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025" el cual quedara así:

ARTÍCULO (LA NUMERACIÓN QUE LE CORRESPONDA) El Gobierno Nacional apropiará quinientos noventa y ocho mil millones de pesos (\$ 598.000.000.000) para la construcción de la Fase II del proyecto multipropósito de la represa El Cercado del río Ranchería en La Guajira a través de una financiación directa asignándose a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR o una cofinanciación por el modelo de APP (Alianza Público Privada).

JUSTIFICACIÓN

En el año 2017, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-302 declaró el estado de cosas inconstitucional del goce de derechos a la alimentación, la salud y el agua potable de menores wayüu en los municipios de Uribí, Manaure, Maicao y Riohacha.

Según la Corte, las causas de la falta de agua potable de las comunidades wayuu son dos: "(i) el entorno ambiental que ha sufrido periodos extensos de sequía que secan los pozos naturales y (ii) una omisión de parte de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable."

La Defensoría del Pueblo, en la respectiva sentencia, propone "Ejecutar las obras necesarias para conectar los acueductos a la represa El Cercado."

La represa el Cercado, es un proyecto que tiene por objeto suministrar agua potable a 9 municipios que son: San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribí, proveer riego para uso agropecuario con un distrito de riego para 18 mil hectáreas y producir energía a través de una central hidroeléctrica.

Este proyecto consta de dos fases. La primera fase, terminada desde el año 2010, contempló la construcción de la represa El Cercado y conducciones principales para las áreas de riego de los Distritos de Ranchería y San Juan del Cesar y obras complementarias. La segunda fase, pendiente de construir, es la construcción de los distritos de riego, abastecer de agua a los nueve municipios y construcción de la central hidroeléctrica.

Han pasado 13 años desde la construcción de la Fase I del proyecto de infraestructura más importante del departamento de La Guajira sin poder

COMISIÓN CUARTA
CAMARA DE REPRESENTANTES
Recibido Por: Diana Lorena Pérez
Fecha: 3/09/2024
Hora: 5:35pm
Número de Radicado: 180



Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
Representante por el
Departamento de La Guajira

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

construir la Fase II que es la que va a solucionar el problema del agua potable para 9 municipios, incluidos 3 que hacen parte de las medidas de la sentencia de la Corte Constitucional y han sido varios los momentos en los que el Gobierno Nacional ha reiterado el compromiso de la culminación de esta obra de tanta importancia y relevancia para el departamento de La Guajira.

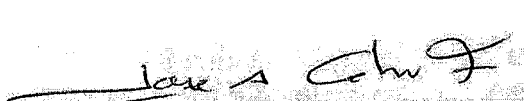
En la visita del 10 de septiembre de 2022 al departamento de La Guajira, en el marco del dialogo entre el presidente Gustavo Petro y el pueblo wayuu, en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, uno de los compromisos del señor presidente fue incluir los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación para cumplir la sentencia y no caer en desacato.

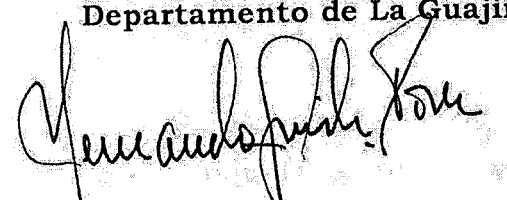
En la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado a través de la Sección Primera, confirmó la sentencia a la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, ordenando al Gobierno nacional a concluir el proyecto Represa del Ranchería.

En la semana de Gobierno Con El Pueblo realizada por el presidente de la Republica en La Guajira con todos sus Ministros uno de los compromisos fue finalizar el proyecto de la Represa del Ranchería.

Por todo lo anterior, propongo que se apropien los recursos necesarios para terminar la construcción de la Fase II de la represa El Cercado en el rio Ranchería, en el departamento de La Guajira, no solo para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, sino para llevar agua a más de 500 mil personas en el departamento y parar la muerte de niños y niñas wayuu por causas asociadas a la falta de agua potable, apropiando quinientos noventa y ocho mil millones de pesos (\$ 598.000.000.000) de acuerdo a la proyección hecha por el Incoder en el año 2010 del costo de la fase II de dicho proyecto aumentandole un 30%.

Atentamente,


JORGE ALBERTO CERCHIARO FIGUEROA
Representante a la Cámara
Departamento de La Guajira


Mauricio Pardo